

## INTRODUCCIÓN

En nuestro país, desafortunadamente resulta escaso el material relacionado con la investigación, difusión, promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por razones relacionadas con el avance histórico en el reconocimiento de estos derechos, la investigación jurídica mexicana en cuanto a los derechos agrario y laboral, es muy vasta, ya que éstos fueron los dos primeros derechos sociales reconocidos en una Constitución a nivel mundial, sin embargo, el resto de los derechos económicos, sociales y culturales, no han sido suficientemente analizados por el derecho mexicano y por lo tanto, su promoción y protección es limitada.

Ello ha motivado, entre otras cosas, una falta de claridad en la distinción entre los derechos sociales y otro tipo de derechos colectivos, como los derechos económicos y los derechos culturales.

Por esa razón, las cátedras de derecho en distintas universidades, así como la bibliografía de las materias o asignaturas respectivas, y por otro lado, la acción de algunos de los organismos protectores de derechos humanos en nuestro país, se concretan a distinguir entre derechos o garantías individuales y “sociales”, como si se tratara de los únicos derechos colectivos existentes, dejando de lado el análisis de los derechos económicos y los derechos culturales, o los derechos de tercera generación así como los de carácter ambiental.

En virtud de lo anterior, es pertinente abundar en el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos colectivos.

Por estas razones, es necesaria la promoción y difusión de los derechos económicos, sociales y culturales para lograr su protección por parte de los organismos encargados del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en nuestro país.

Al no conocerse de manera específica por parte de la población cuáles son estos derechos y sus características, no se exige a los órganos encargados de su protección y difusión, que establezcan medidas para garantizar su ejercicio, y por ello existe un limitado número de quejas ante las comi-

siones nacional y estatales de derechos humanos en esta materia, lo cual es preocupante sobre todo si tomamos en cuenta que no existe otra opción para su defensa y protección actualmente en el sistema mexicano.

Además de lo citado, los especialistas, estudiosos y defensores de derechos humanos, requieren tener información sistematizada sobre la naturaleza, clasificación y contenido de estos derechos para mejorar su promoción, y en lo que toca a la parte académica, esta investigación también pretende una propuesta para la sistematización de la información relacionada con estos derechos que permita facilitar su manejo y comprensión.

Esta investigación pretende, además, justificar la necesidad de crear de un mecanismo jurisdiccional para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en México.

Como consecuencia de lo arriba indicado, se desarrolla un primer apartado en el que se pretende identificar las principales diferencias entre los derechos colectivos y los de carácter individual, además de precisar las obligaciones que corresponden al Estado frente a los derechos colectivos consagrados en la Constitución.

Asimismo, adquiere especial importancia distinguir los derechos colectivos de los derechos sociales, que son sólo una parte de ese género, pues en nuestro país es usual la confusión entre unos y otros; por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a la protección de la salud, se identifican indebidamente como derechos sociales, aunque en estricto sentido no revisten tal carácter, sino que se ubican en el rubro de derechos económico-culturales.

En el segundo apartado se desglosa el contenido de los derechos colectivos consagrados en la Constitución mexicana, con el fin de permitir al lector conocer cual es el conjunto de esos derechos que permanecen en el texto constitucional sin mecanismos jurisdiccionales para su protección.

El tercer capítulo aborda el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales en diversos tratados e instrumentos generales y específicos, tanto del sistema universal como del interamericano.

La última sección contiene la propuesta de mecanismos jurisdiccionales para la protección y defensa de estos derechos, de tal forma que constituye la respuesta al problema de investigación originalmente planteado.

La principal conclusión a la que se arriba es la necesidad de crear mecanismos jurisdiccionales para la protección de los derechos colectivos en el sistema jurídico mexicano, sin dejar de lado la importancia de la promoción y difusión de esos derechos.